

### RICARDO RAUL GUTIERREZ

El primer punto de este documento es una parte del trabajo denominado “**¿Pueden las universidades estar sujetas al principio de eficiencia en su gestión?**”, publicado en **Primer Congreso de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación**. Edición SAECE. Noviembre/2005. Es reproducción de una parte de un trabajo anterior denominado “**La gestión universitaria, una actividad complicada**”, realizado a solicitud del Ministerio de Educación de la Nación y que fue presentado en el **Seminario de cooperación entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña “Los desafíos de la educación”**; organizado por la Secretaría de Educación Superior y The British Council, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre/2000.

#### 1. La cuestión de la información en el sistema universitario.

La información de las actividades universitarias es poco confiable, tiene pocos controles internos y externos y descansa poco sobre bases científicas. Existen estudios focales, referidos casi siempre a un momento en el tiempo. La información continúa es casi inexistente.

Respecto a este aspecto también hay posiciones internas encontradas: hay quienes plantean la necesidad de una absoluta transparencia por ser las universidades usuarias de fondos públicos de los cuales irremediamente debe rendirse cuenta, y hay quienes sustentan la idea de informar sólo lo imprescindible, y si es posible nada, en tanto y en cuanto la transparencia puede ser motivo de ajustes y pérdidas relativas de espacio dentro del estado, que se percibe como muy poco transparente en sí mismo. En el medio, existen diferentes matices que dan lugar a posiciones más o menos cercanas a uno u otro extremo.

Los primeros enfatizan el carácter republicano de las instituciones universitarias; pero las experiencias en la realidad argentina, de un bajo grado de confiabilidad en los poderes políticos públicos y de valoración de la transparencia, hacen que sean consideradas como propulsores de poner a la universidad en una situación de vulnerabilidad por ingenuidad.

Los segundos ponen el acento en la conflictividad de la sociedad y el estado argentino; y presentan dos claras vertientes: los que tienen una auténtica preocupación de defensa institucional y los que tienen una preocupación de defensa de sectores y nichos de actividad. En este subconjunto se presentan posiciones de absoluta negación de informar con posiciones correlativas del rechazo de la aplicación en las universidades de criterios de eficiencia.

Además, de estas cuestiones, que podrían denominarse valorativas, la realidad se manifiesta como carente de buena información; en algunos casos por inexistencia de adecuados mecanismos de contabilización de las actividades y en otros por falta de compilación de las registraciones. Cuanto de estos problemas se debe a inexistencia de normas y procedimientos y personal calificado, y cuanto se debe a razones estratégicas de no transparentar, es algo muy difícil de establecer. Es claro que la inexistencia de normas y procedimientos y personal calificado, puede deberse en muchos casos a la intención de no transparentar.

Esto ha provocado un muy lento proceso de informatización; y la utilización de la información sólo como instrumento de registro, sin su uso como instrumento de gestión y rendición de cuentas. Asimismo, la utilización permanente de la realización de auditorías, como herramientas de determinación de exactitud de información no tiene

generalización.

La informatización avanzada de algunas universidades les provoca algunos problemas adicionales, que resultan de los niveles de conocimiento necesarios para ser eficiente en el uso de la tecnología correspondiente. Tienen dificultades para retener recursos humanos de alta calificación si pretenden compensarlos con las retribuciones salariales normales, o se encuentran con conflictos internos derivados de los pagos de salarios diferenciales que se ven obligadas a pagar por razones de competitividad del mercado, dado que todas las actividades están experimentando un creciente grado de aplicación de la informática en su operatoria, y en muchas regiones no existe oferta suficiente de personal calificado.

La cuestión informacional parece ir mejorando. Pero, es necesario tener presente que aún cuando la informatización se aplique a la mayoría de las operaciones universitarias, lo que seguramente las facilitará; queda pendiente el uso de la información producida para la toma de decisiones de gobierno y de dirección, que requiere cambios que no son sólo técnicos sino esencialmente técnico-sociales, ya que implican sustituir intuición por racionalidad.

En definitiva, hoy es muy difícil poder conocer datos fidedignos de las universidades, fuera de la cantidad de graduados por carrera y por año y la asignación originaria de recursos para cada universidad en el presupuesto nacional.

Es difícil conocer la cantidad de alumnos activos, la cantidad de alumnos que cursan materias, los alumnos aprobados, y prácticamente imposible, los alumnos por cátedra, los alumnos en diferentes niveles de avance en su carrera, etc. No porque la información no exista, sino porque no está procesada y no está disponible.

Cuando la información tiene que ver con recursos y gastos, la cuestión suele ser también complicada, a pesar de la existencia de normas generales presupuestarias. En los últimos años, se han publicado por parte del gobierno nacional, algunas informaciones sobre lo efectivamente recibido y gastado, pero sólo en montos globales. Algunas universidades publican anualmente balances con algún grado de apertura en los principales rubros. No es posible determinar con exactitud costos de organismos, ni costo de graduados, ni costo de carreras. Tampoco puede establecerse con seguridad el monto proveniente del estado, efectivamente recibido por cada universidad. Algunas universidades reciben recursos por otras vías distintas de las asignaciones explícitas en el presupuesto nacional, derivadas de transferencias de diferentes ministerios y el uso de otros mecanismos no publicitados suficientemente.

En el mismo sentido, en muchos casos es difícil establecer lugares de trabajo y funciones de agentes, sobre todo académicos.

En algunos casos no se produce la información primaria, en otros no se procesa, en otros no se difunde. A veces se publica en instrumentos a los cuales no existe acceso, siquiera por interlocutores calificados.

## 2. La perspectiva de política y gestión universitaria.

En las universidades públicas es imposible defender la inexistencia de información y el retaceo de la divulgación de la misma, a pesar de las experiencias existentes de esa práctica. Esto es así en razón de su carácter de entidades con autonomía y de sus responsabilidades públicas, tanto para rendición de cuentas como para el logro de un funcionamiento eficiente. Es decir, tanto por razones externas como por razones internas.

En el primer caso, la información dirigida a la sociedad y al estado deviene naturalmente de ser los sostenes de su funcionamiento. Esto no implica desconocer que en numerosas oportunidades, las universidades se enfrentan con los gobiernos;

pero ¿que defensa mejor de la posición universitaria puede argumentarse en estas circunstancias que la sociedad comprenda y esté enterada de la labor universitaria? Ello otorgaría probablemente una de las pocas posibilidades eficientes, en el mundo moderno, de defensa de las universidades ante políticas agresivas y discriminatorias de los gobiernos.

Hacia adentro de las instituciones, la generación y divulgación de información, limita la discrecionalidad de las gestiones y un uso inadecuado de los recursos. La resistencia habitual a este planteo resulta lógica en cuanto significa una mayor socialización del poder. Pero facilita apreciablemente la discusión racional, que se transforma en razón informada y documentada; lo que permite el logro de los objetivos generales reconocidos por la institución.

En los tiempos actuales, que se caracterizan por la existencia de enorme cantidad de datos, la información debe tener una adecuada clasificación y exponerse en términos de las variables relevantes para el funcionamiento y la gestión.

Ello significa desarrollar sistemas informáticos que puedan clasificar las variables económicas y académicas en forma entendible y clara. Además, necesita tener exactamente definida una política comunicacional y los instrumentos y organismos idóneos para llevarla adelante.

Resulta incontestable que las universidades deben generar información, difundirla y utilizarla en las actividades cotidianas y la toma de decisiones. La argumentación justificativa resulta incluso redundante, dado el carácter intrínseco de este proceso en la actividad educativa, esencialmente si se plantea en un contexto democrático.